JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUMERO TRES
ALICANTE

Recurso nº: Abreviado 549/2020
Recurrente: [REDACTED]
Procurador: AMANDA TORMO MORATALLA
Letrado: MIGUEL R. LADRON DE GUEVARA
Recurrido: AYUNTAMIENTO DE ALCOY
Procurador: ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDO
Letrado: JUAN IGNACIO ORTIZ JOVER

DE LA CRUZ
PROCURADOR
28 ENE. 2022
NOTIFICADO

SENTENCIA Nº 33/2022

En la Ciudad de Alicante, a 26 de enero de 2022

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. MARIA BEGOÑA CALVET MIRÓ Magistrado-Juez accidental del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo numero TRES de Alicante, los presentes autos de Procedimiento Abreviado n.º 549/2020 seguido a instancia de [REDACTED] representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Amanda Tormo Moratalla y asistido del Letrado D. Miguel R. Ladron de Guevara, frente a el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy representado por el Procurador de los Tribunales D. Enrique De La Cruz Lledó y asistido del Letrado D. Juan Ignacio Ortiz Jover, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, en los que concurren los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 28 de agosto de 2020 fue turnado a este Juzgado Recurso Contencioso-Administrativo formulado por la Procuradora de los Tribunales Dña. Amanda Tormo Moratalla en nombre y representación de [REDACTED] contra la Resolución de fecha 4 de junio de 2020 desestimatoria de la reclamación de daños y perjuicios presentada en el Expediente de Reclamación Patrimonial numero 86/2019/RP de dicho Ayuntamiento. Tras exponer los hechos y fundamentos legales que estimó oportunos en apoyo de su pretensión, terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria del recurso, en los términos interesados en el Suplico de su demanda.

SEGUNDO.- Admitido a tramite el recurso, previa reclamación del expediente administrativo, fueron citadas las partes a la celebración de una vista que tuvo lugar el pasado 25 de enero del año en curso, en los términos que constan en la videograbación. Practicada la prueba propuesta y admitida en los términos que constan en las actuaciones, y emitidas por ambas partes las respectivas Conclusiones Orales, han quedado los Autos sobre la mesa de SSª para resolver.

TERCERO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso, la Resolución de fecha 4 de junio de 2020 desestimatoria de la reclamación de daños y perjuicios presentada en el Expediente de Reclamación Patrimonial numero 86/2019/RP de dicho Ayuntamiento, en solicitud de una indemnización por daños y perjuicios sufridos por el recurrente en el vehículo de su propiedad el pasado día 6 de junio de 2019. Sostiene la parte actora, que el día de los hechos, el vehículo estaba debidamente estacionado en la Plaza Al Azraq de la localidad de Alcoy, cuando fue colisionado por

una placa de señalización de aparcamiento reservado, que se desprendió de su soporte, golpeando el vehículo y ocasionando daños. La reclamación se cifra en la cantidad de 1098,72 euros, intereses y costas.

La acción se dirige frente al Ayuntamiento de Alcoy, por un presunto funcionamiento anormal del servicio público, al considerar el recurrente, que los daños sufridos fueron debidos al mal estado de conservación y mantenimiento en el que se encontraba la placa señalizadora, que al desprenderse de su soporte, causó daños al impactar con su vehículo.

Por el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy se ha alegado la falta de acreditación de los hechos y la inexistencia de nexo causal, al entender que el modo de causación de los daños no está acreditado, no existiendo testigos presenciales de los hechos, y estando basados los mismos en la mera declaración unilateral de la recurrente.

SEGUNDO.- Para dar respuesta a la cuestión controvertida, debemos recordar que, tal y como se indica en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 23 de junio de 1995, la responsabilidad de las Administraciones Públicas, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene su base, no sólo en el principio genérico de la tutela efectiva en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, que reconoce el artículo 24 de la Constitución, sino también, de modo específico, en el artículo 106.2 de la propia Constitución, al disponer que: "los particulares en los términos establecidos en la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos", y en las leyes 39/2015 y 40/2015 que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

La Jurisprudencia ha venido entendiendo que la responsabilidad patrimonial queda configurada mediante la acreditación de los siguientes requisitos: a) la efectiva realidad de un daño o perjuicio evaluable económicamente, individualizado en relación a una persona o un grupo de personas y antijurídico, de forma que si se da en el sujeto el deber jurídico de soportar la lesión decae la obligación de indemnizar; b) que el daño sufrido sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una relación directa de causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera influir en el nexo causal; y c) que no se haya producido por fuerza mayor.

Se trata de una responsabilidad de **carácter objetivo y directo**. Con ello se pretende significar -señala la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1998 - "que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, ya que dicha responsabilidad surge al margen de cual sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, pues cualquier consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad. Y es directa por cuanto ha de mediar una relación de tal naturaleza, inmediata y exclusiva de causa efecto entre el actuar de la Administración y el daño producido, relación de causalidad o nexo causal que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal".

Expuesto lo anterior, en el presente procedimiento, del examen del Expediente Administrativo y de la documental aportada por la parte actora, en particular de las fotografías no impugnadas de contrario, resulta acreditado que el vehículo efectivamente se encontraba estacionado en el lugar de los hechos, y que la placa

señalizadora se había desprendido de su soporte, encontrándose en el suelo junto al vehículo. Dado que los daños apreciados en el vehículo son perfectamente compatibles con el impacto por la placa señalizadora, resulta lógico pensar, con arreglo a las máximas de experiencia, que la dinámica del impacto fue tal y como la parte actora la describe, pese a no poder contar con prueba testifical que la avale.

Por lo tanto, y siendo responsabilidad del Ayuntamiento de Alcoy de adoptar las medidas necesarias y adecuadas para que los elementos de señalización de la vía pública, estuvieran en condiciones de seguridad, estanqueidad y correcta colocación, y no advirtiendo falta de diligencia en el proceder de la actora, es por lo que procede acceder a lo peticionado, estimando íntegramente el recurso presentado.

TERCERO.- Encanto a las costas procesales, de conformidad con lo prevenido en el artículo 139 de la LJCA, atendiendo al principio del vencimiento objetivo, procede la imposición de las mismas a la Administración.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

FALLO

Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por [REDACTED]

1.- Debo declarar y declaro la NULIDAD de la Resolución de fecha 4 de junio de 2020 desestimatoria de la reclamación de daños y perjuicios presentada en el Expediente de Reclamación Patrimonial número 86/2019/RP de dicho Ayuntamiento por no ser conforme a Derecho.

2.- Debo declarar y declaro la responsabilidad patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy por los daños sufridos por la recurrente en el vehículo de su propiedad condenando al mismo a su debida indemnización, con el abono de la cantidad de 1.098, 72 euros, así como el pago del interés legal desde la fecha de la reclamación administrativa.

Y todo ello con expresa imposición de las costas procesales causadas a la Administración.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.1 a) LJCA.

Devuélvase el Expediente Administrativo a la Administración que corresponda.

Así por esta mi sentencia de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos de que dimana, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado-Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha, doy fé.